



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-5

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 63 O R D I N A R I A

MARTES 4 DE JULIO DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cincuenta y seis minutos del martes cuatro de julio de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTAS

Se sometieron a consideración los proyectos de actas de las sesiones públicas números cuatro solemne y sesenta y dos ordinaria, celebrada el lunes tres de julio del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dichos proyectos.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del martes cuatro de julio de dos mil diecisiete:

I. 62/2016

Acción de inconstitucionalidad 62/2016, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 128, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso: *"PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 62/2016. SEGUNDO. Se reconoce la invalidez del artículo 128, tercer párrafo, en la porción normativa "y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial" de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, bajo la interpretación conforme que se precisa en el último considerando de esta sentencia. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta".*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando cuarto, relativo a las causas de improcedencia. El proyecto propone declarar infundada la causa de improcedencia alegada por la Procuraduría General de la República, consistente en que la accionante no hizo ningún pronunciamiento respecto del estudio de fondo; en razón de que la promovente hizo valer conceptos de invalidez tendientes a combatir la regularidad constitucional de la norma impugnada.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando cuarto, relativo a las causas de improcedencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando quinto, relativo al estudio de fondo.

Resumió los conceptos de invalidez esgrimidos por la accionante: 1) que el precepto impugnado, al no permitir la suspensión en el juicio de amparo respecto de las técnicas de investigación y las medidas cautelares autorizadas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Judicialmente, permite ejecutar los actos de modo irreparable, dejando prácticamente sin materia cualquier recurso y como consumada cualquier violación a derechos fundamentales, 2) que no existe en la Constitución una norma que prohíba conceder la suspensión dentro del juicio de amparo, tratándose de una técnica de investigación o una medida cautelar concedida por autoridad judicial en el procedimiento penal, por lo que el legislador no justifica la expedición de esta norma impugnada, y 3) que la norma no permite que, para conceder la suspensión, el órgano jurisdiccional pueda realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social.

El proyecto propone determinar, conforme a los precedentes de este Alto Tribunal, el alcance de las normas constitucionales y convencionales que se estiman violadas. Se puntualiza que el precepto impugnado establece los requisitos para que proceda la suspensión a petición de parte; sin embargo, sólo se cuestionó su última parte, en la que señala que no serán objeto de suspensión: “y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial”. Se advierte que, de la exposición de motivos, la adición impugnada obedeció a la necesidad de atender a la reforma constitucional que transformó el sistema de justicia penal, de uno mixto inquisitivo a uno acusatorio y oral que debía ser implementado en todo el territorio nacional, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

establecieron las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos en toda la República, en el fuero federal y en el fuero local. Se hace referencia, respecto de las técnicas de investigación y las medidas cautelares, a los artículos 16, 20 y 21 constitucionales, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se consideran parcialmente fundados los conceptos de invalidez pues, por un lado, existe un fundamento constitucional para que el Congreso de la Unión emitiera la reforma impugnada, a saber, el artículo 107, fracción X, constitucional expresamente establece que “Los actos reclamados [en el amparo] podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria”, y que tales disposiciones tienen por objeto hacer efectivas las técnicas de investigación y las medidas cautelares dictadas en el procedimiento penal, las cuales se encuentran contempladas en los artículos 16, 19, 20 y 21 constitucionales. No obstante, se estima que asiste la razón al promovente cuando aduce que la porción impugnada vulnera los artículos 107, fracción X, constitucional, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debido a que, si bien las cuestiones relativas a la suspensión del acto reclamado no se refieren directamente a la admisión del juicio de amparo, pueden llegar a incidir en el derecho al recurso efectivo, en tanto que podrían generar la ineficacia del medio de control constitucional al permitirse, de manera



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Indiscriminada en los casos impugnados, la consumación de ciertos actos con la consecuente ineficacia del juicio de amparo, considerado como un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos.

Abundó que, de manera general, puede advertirse que la prohibición de conceder la medida suspensiva, tratándose de técnicas de investigación y medidas cautelares, atiende a cuestiones de orden público: garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones de los delitos, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento, de manera que se fortalezca el sistema de justicia penal acusatorio y oral; al considerarse que, por la propia naturaleza de esos actos, la mayoría de las técnicas de investigación deben realizarse de inmediato con el objeto de no perder huellas o indicios indispensables en la investigación que, por su propia naturaleza, se consuman de manera instantánea. Por lo que hace a las medidas cautelares, se advierte que dicha prohibición atiende también a la naturaleza de los actos, dado que las medidas provisionales tienen por objeto salvaguardar de manera temporal una situación jurídica, por lo que su suspensión la haría nugatoria, en tanto que se ejecutarían los actos que se pretenden evitar con tal medida de precaución y, por ende, se impediría el correcto desarrollo del procedimiento y del proceso penal, como se establece en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, una prohibición tajante impide el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ejercicio valorativo jurisdiccional y, por ende, viola el derecho a un recurso efectivo, que implica la obligación de resolver los conflictos que se plantean sin obstáculos y evitando formalismos que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que se prohíbe al legislador la arbitrariedad y la irrazonabilidad, pero también el establecimiento de normas que, por su rigorismo o formalismo excesivo, revelen una desproporción entre los fines que aquellas formalidades persiguen y la efectiva protección de los derechos de las personas.

Por lo anterior, se propone una interpretación conforme para salvar la validez de la norma impugnada, esto es, que la porción normativa impugnada sea leída de acuerdo con los postulados constitucionales y convencionales, entendiendo que constituye la regla general al analizar la suspensión respecto de los actos que se impugnan en el amparo; sin embargo, pueden existir excepciones, siendo el juzgador de amparo a quien le corresponde analizar, en cada caso concreto, y realizar la determinación correspondiente, atendiendo a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna específica técnica o medida cautelar pudiera llegar a ser suspendida.

Al respecto, cabe advertir que, por lo que hace a las medidas cautelares el análisis se estima que debe ser más riguroso, pues —como se señaló, de manera general— estas medidas por su propia naturaleza no podrían ser



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

suspendidas so pena de que se permita la consumación de un acto que pudiera ser lesivo tanto para las víctimas u ofendidos en el proceso penal como para algún interviniente en dicho proceso; así como, que se lleve al fracaso el propio proceso penal. Sin embargo, dado que podrían existir algunas medidas precautorias que tomara la autoridad responsable que si bien, incidieran en la medida cautelar, podrían no referirse directamente a ello o bien que desbordaran la materia de la propia medida e incluso, alguna que pudiera ser suspendida, es que se determina la interpretación conforme señalada, con la especificación a que se ha hecho referencia, para que sea el juzgador de amparo el que, en cada caso, pueda realizar la determinación correspondiente a la luz de los postulados constitucionales y convencionales precisados.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó en contra de la calificación del proyecto de los conceptos de invalidez, así como de la interpretación conforme.

Estimó que la pregunta que se debe responder es si el artículo 107, fracción X, constitucional permite al legislador establecer prohibiciones para la concesión de la suspensión. Retomó que el proyecto, por un lado —en el último párrafo de la página ochenta y seis—, afirma que ese precepto es el fundamento constitucional para que el legislador federal emita la norma, y le deja una libertad configurativa y, por otro lado —últimos dos párrafos de la página noventa—, afirma que una prohibición tan tajante impide el ejercicio valorativo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

jurisdiccional y trastoca el derecho a un recurso efectivo, ya que debe ser el juzgador quien determine si, en cada caso concreto, la naturaleza del acto permite o no la suspensión y determine si la concede, ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

Valoró como correcta la primera respuesta del proyecto, en tanto que el artículo 107, fracción X, constitucional permite al legislador establecer prohibiciones generales para la concesión de la suspensión, en este caso, a técnicas de investigación y medidas cautelares emitidas por autoridad judicial, por lo que la prohibición de la concesión de la suspensión establecida en la norma impugnada resulta constitucional y, por ende, compartió el proyecto hasta el penúltimo párrafo de la página ochenta y seis, claramente dirigido a justificar la constitucionalidad de la norma combatida, y propuso eliminar el resto del razonamiento, ya que no es acorde con la argumentación previamente sustentada.

Recordó que el dieciocho de junio de dos mil ocho se reformó el artículo 20 constitucional para instaurar el nuevo sistema de justicia penal, en cuya exposición de motivos se señaló, entre otras razones, que “La sociedad mexicana percibe que la lentitud, iniquidad, corrupción e impunidad son el denominador común en la mayoría de los casos cuando las personas intervienen en la sustanciación de un proceso penal”, “Es tiempo de abandonar las prácticas arcaicas que incluso están enquistadas en la legislación y migrar a un



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

nuevo sistema que satisfaga la demanda ciudadana”, “La modernización de un sistema penal de un Estado social y democrático como el nuestro, que salvaguarde los derechos reconocidos en nuestra Constitución a las víctimas del delito, así como a los acusados de éste y a la ciudadanía en general, es posible a través de un procedimiento acusatorio, adversarial y oral, que sin falsos garantismos cumpla los principios del debido proceso, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad, utilizando como herramienta indispensable la oralidad” y “Los beneficios que se ofrecen a los mexicanos no son la oralidad por la oralidad, sino la expectativa de que el sistema de justicia sea más eficaz en la resolución de los conflictos sociales derivados del delito y que dichas soluciones se tomen siempre con la convicción de que se han respetado puntualmente los derechos fundamentales reconocidos a los gobernados en la Constitución, los instrumentos internacionales y en las leyes”.

Actualmente, el artículo 20, apartado A, fracción I, constitucional prevé que “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”. Precisó que una de las principales características de este sistema es que la etapa de investigación se componga de una preliminar, dirigida por el ministerio público, y una complementaria, controlada o supervisada por un juez de control, que deberá garantizar los derechos de los intervinientes en el proceso, conforme al



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

artículo 16, párrafo décimo cuarto, constitucional. En este contexto, el Código Nacional de Procedimientos Penales estableció un libro segundo, título III —denominado “ETAPA DE INVESTIGACIÓN”, capítulo III —denominado “TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN”, que comprende los artículos del 227 al 252. Indicó que las medidas a que se refiere el artículo 128, párrafo tercero, de la Ley de Amparo son las del numeral 252 de este Código, señaladas como “Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control” que, por su naturaleza, son emitidas escuchando al ministerio público.

Destacó que las técnicas de investigación decretadas por el juez de control admiten recurso de revocación, por haber sido concedidas sin previo debate, en términos del artículo 465 de dicho Código, lo que permite que el juez que la emitió vuelva a analizar la medida y resuelva escuchando, ahora no sólo al ministerio público, sino también al imputado y a la víctima u ofendido. Por eso, el referido Código contiene un libro primero, título VI —denominado “MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN, FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES”, capítulo IV, que regula que “Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento”. Asimismo, el diverso numeral 155 del Código en cita establece los tipos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de medidas cautelares, determinación que no solo es apelable, sino revisable por el propio juez a petición de las partes, cuando estimen que las condiciones que prevalecían, al imponerse, han variado. En este sentido, indicó que tanto las técnicas de investigación autorizadas por la autoridad judicial, como las medidas cautelares, según el artículo 16, párrafo décimo cuarto, constitucional, se resolverán por un juez de control “en forma inmediata, y por cualquier medio, [...] garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos”.

Precisó que, en ese contexto, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis se reformó el artículo 128, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que prohíbe la suspensión de técnicas de investigación y medidas cautelares emitidas por la autoridad judicial, cuya exposición de motivos señaló que se implementaría para evitar obstáculos para el desarrollo del nuevo procedimiento penal, es decir, que la etapa de investigación inicial y complementaria no sea suspendida con motivo de la interposición del juicio de amparo y la concesión de una suspensión provisional o definitiva.

Concluyó que la norma impugnada es válida, en tanto coadyuva el desarrollo eficaz de la etapa de investigación en el nuevo procedimiento penal, en la medida que evita la suspensión de actos de investigación o de medidas tomadas para proteger el avance del procedimiento y a las partes mismas, lo que resulta necesario para cumplir con el objeto del proceso, que es el esclarecimiento de los hechos, la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

reparación del daño, que el responsable no quede impune y se salvaguarden plenamente los derechos humanos. Exhortó al Tribunal Pleno a reflexionar acerca de la racionalidad de ambos procedimientos: el de amparo y el penal adversarial, las cuales no se encuentran necesariamente empatadas ni en la reforma constitucional ni en algunas disposiciones originarias del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que las reformas, como la impugnada, deben apreciarse en sus méritos.

Recalcó que las salvaguardas establecidas en el proceso penal acusatorio y adversarial son suficientes para garantizar los derechos de los intervinientes en el proceso, en la inteligencia de que existen recursos y, en contra de sus resoluciones, existe el amparo indirecto, con lo que se armoniza la doble condición de ambos procesos.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se manifestó de acuerdo con algunas consideraciones del proyecto, pero no con su sentido. Indicó que el precepto impugnado confunde dos tipos de control judicial: 1) la que realiza el juez de control cuando dicta medidas cautelares o técnicas de investigación, a su vez sujetas a control judicial, y 2) la que realiza el juez de amparo, que tradicionalmente tiene su origen en el *habeas corpus*, especialmente en las técnicas de investigación del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, estimó que el artículo impugnado es inválido.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea recalcó que el artículo 107, fracción X, constitucional es claro al contemplar que “Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social”. Recordó que ha votado reiteradamente en el sentido de que las normas de la Ley de Amparo que excluyen tajantemente la suspensión, sin texto constitucional que las respalde, son inconstitucionales, además de que el legislador reglamentario no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, cuyos únicos elementos de ponderación son la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social.

Observó que la lógica del proyecto está encaminada, en primera instancia, a que el legislador no puede establecer prohibiciones tajantes para la suspensión; sin embargo, también busca evitar que se suspenda u obstaculice el nuevo sistema penal acusatorio, por lo que propone, como regla general, la no procedencia de la suspensión, pero deja la posibilidad excepcional de que el juez de amparo establezca en qué casos pudiera llegar a proceder la suspensión. Aclaró no compartir esa lógica porque el artículo 107, fracción X, constitucional da esta potestad a los jueces de amparo, la cual no puede limitarse por el legislador.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Aclaró que lo anterior no significa que, si la Ley de Amparo no dice nada sobre que no procede la suspensión, entonces los jueces de amparo tienen que otorgarla en todos los casos, sino que en el nuevo sistema penal acusatorio, como en todas las materias, el juez debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la probable afectación al interés social, de manera que su otorgamiento no perjudique al sistema, una técnica de investigación o una medida cautelar.

Apuntó no entender por qué una medida cautelar de una autoridad judicial no podría estar sujeta a suspensión, dado que todas las resoluciones de los jueces de proceso son justiciables y están sujetas a revisión; por tanto, la norma impugnada viola el artículo 107, fracción X, constitucional. Valoró que la interpretación conforme del proyecto es una salida intermedia, plausible en su lógica; sin embargo, la opción constitucional debe ser dejar en manos de los jueces la valoración respectiva, porque no se pueden prever todas las circunstancias que puedan suscitarse en los procesos existentes y por existir. Por tanto, anunció voto por la invalidez del precepto en cuestión.

La señora Ministra Piña Hernández distinguió que la procedencia de la suspensión no significa que el juez la deba otorgar, pues si bien es cierto que, con el nuevo procedimiento penal, a través del juez de control se garantiza una efectiva protección de los derechos fundamentales, en el amparo se analizará un acto de



autoridad, el cual puede o no ajustarse a lo que la ley contempla que el juez de control debe hacer.

Ejemplificó que el artículo 157, párrafo último, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que “En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código”, lo que no obsta para que se decrete una prisión preventiva en relación con un delito que no merezca esa medida cautelar, por lo que esa decisión puede ser objeto de control constitucional por violar derechos fundamentales.

Opinó que el artículo 107, fracción X, constitucional, cuando contempla que “podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria”, implica que el Constituyente dejó en manos del legislador secundario establecer los casos en los que proceda la suspensión, máxime que indica que “para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social”. Al respecto, indicó que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para la procedencia de la suspensión: “I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público”, y si bien el legislador propuso en el diverso numeral 129 de dicha ley un catálogo, es



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ejemplificativo, mas no enunciativo de los casos en los que se afecta el interés social y el orden público, máxime que en su párrafo último precisó que “El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensiva pueda causarse mayor afectación al interés social”.

Resaltó que el artículo impugnado se introdujo vía reforma, pero con una redacción como una prohibición absoluta, por lo que, si bien el nuevo sistema penal acusatorio necesita determinados requisitos y supuestos para hacerlo congruente y eficaz, ello no implica volver improcedente la suspensión contra un acto de un juez de control que no se ajuste a lo que le establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, estaría en contra del proyecto porque, al tratarse de una regla tajante de improcedencia de la suspensión, resulta inconstitucional, pues podría darse el supuesto de que la actuación del juez de control haya contravenido las reglas de ese Código. Tampoco coincidió con la interpretación conforme propuesta, aunque compartió las consideraciones del proyecto. Finalmente, anunció su voto por la invalidez del precepto estudiado.

El señor Ministro Pérez Dayán recordó ser partícipe de las interpretaciones conformes, que auxilien en los fines previstos por el legislador, y para salvar la constitucionalidad de los preceptos en cuestión.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Se manifestó de acuerdo con el razonamiento del proyecto, en cuanto a que el artículo 107, fracción X, constitucional permite una libertad de configuración al legislador ordinario para determinar los casos en la suspensión del acto reclamado no proceda. Recordó que, desde la emisión original de la Ley de Amparo, el legislador previó que, para otorgar la suspensión, no debían causarse perjuicios a la colectividad y señaló algunas hipótesis de cuando se causaran esos perjuicios, por ejemplo, cuando se: “I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario”.

En el caso del artículo 128 impugnado, recordó que, en una primera reforma, se introdujeron los supuestos de improcedencia de la suspensión contenidos en la Constitución en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Asimismo, la reforma en cuestión respondió a la emisión del Código Nacional de Procedimientos Penales, añadiendo el párrafo “Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

concedida por autoridad judicial”. Resaltó que la redacción de la última reforma tuvo una técnica legislativa desafortunada, pues no abonó a la seguridad jurídica ni a la voluntad del legislador, que fue precisar los supuestos normativos que imposibilitaran la procedencia de la suspensión.

Retomó que la propuesta de interpretación conforme del proyecto consiste en que, aunque la norma contenga una prohibición absoluta de la suspensión por razones de índole práctico, habría razones de derechos humanos violentados que llevaran a conceder la suspensión, a efecto de evitar una consecuencia que no tendría remedio ni con una sentencia favorable, es decir, actos consumados irreparablemente, en tanto que al juzgador de amparo le corresponde analizar cada caso concreto y determinar lo conducente atendiendo a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora. En ese sentido, estimó que no es necesario recurrir a esta interpretación, pues el artículo 150 de la Ley de Amparo marca la actuación de un juez, tratándose de este tipo de circunstancias: “En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso”.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Aclaró que los procedimientos penales, de donde derivan las técnicas de investigación o las medidas cautelares otorgadas por autoridad judicial, participan de una idea fundamental: son de orden público y no deben suspenderse, por lo que todo juez, al que le soliciten una suspensión, deberá encontrar la forma en que éste no se detenga; sin embargo, si con la ejecución de los actos controvertidos pudiera generar un daño irreparable o una violación grave a derechos humanos, encontrará las fórmulas necesarias para balancear dos aspectos: que el procedimiento continúe y que cese aquella afectación al derecho que se pretende combatir a través del juicio de amparo, y que no se pueda resarcir con una sentencia favorable.

Por lo anterior, evidenció la dificultad de aceptar la interpretación conforme propuesta, frente a una prohibición legal para el juzgador, pues no corresponde a un ejercicio de hermenéutica abrir un espacio y prever que, independientemente de esa prohibición, existen cuestiones excepcionales, máxime que existe el artículo 150 de la Ley de Amparo, el cual permitirá balancear esos dos supuestos. Por tales razones, no compartió la conclusión del proyecto, y se inclinó por la invalidez de la norma cuestionada.

El señor Ministro Medina Mora I. recordó haberse pronunciado en el sentido de que el nuevo proceso de justicia penal adversarial obliga a replantear los criterios sustantivos y formales del derecho constitucional y del juicio



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de amparo, a efecto de posibilitar la protección más amplia de los derechos humanos dentro del juicio penal, que privilegia la rapidez y concentración con diversas salvaguardias procesales.

Recalcó que la lógica de construir más actores dentro del proceso penal, particularmente el juez de control, tiene el propósito de dar una instancia adicional distinta del control constitucional de las diversas actuaciones dentro del proceso, además de que el Código Nacional de Procedimientos Penales expresa claramente los lineamientos que debe seguir el juez de control, quien tiene un mandato distinto del que tenían los jueces de proceso penal en el sistema mixto, y distinto de los que tiene el juez de proceso oral, por ejemplo, en su artículo 97, como principio general: "Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento".

Puntualizó que dicho Código también prevé que son recurribles todas las actuaciones concernientes a las medidas cautelares y los actos de investigación, entre otros que, conforme al nuevo sistema, corresponde su conocimiento a los jueces de control. Sobre esa base, se expresó en la lógica de aceptar la validez plena de la disposición impugnada, sin interpretación conforme, ya que simplemente limita la suspensión, no el desahogo del fondo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

del juicio de amparo, en la inteligencia de que el juez de control tiene funciones de control constitucional y de convencionalidad, que no tenían los jueces del viejo sistema.

Opinó que debe dársele espacio al nuevo sistema penal para que se asiente, sin descartar que, en el trayecto, sean necesarios algunos ajustes, como en cualquier obra humana.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las doce horas con cincuenta y ocho minutos y reanudó la sesión a las trece horas con cuarenta y dos minutos.

La señora Ministra Luna Ramos concordó con el sentido del proyecto, pero no mediante una interpretación conforme, sino sistemática, a partir de la lectura de los artículos que regulan la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo:

El artículo 128, párrafo tercero, de la Ley de Amparo: “Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial”, el cual, si bien no especifica a qué tipo de medidas cautelares, medidas de protección o técnicas de investigación se refiere, están perfectamente delimitadas y reguladas en el Código



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Nacional de Procedimientos Penales, en su libro primero, título VI —denominado “MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN, FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES”—, así como en su libro segundo, título III, capítulo III —denominado “TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN”, que inicia con el artículo 227.

Puntualizó que, en el supuesto cuestionado, el acto reclamado en el juicio de amparo será cualquiera de estas medidas, decretadas durante la tramitación del procedimiento penal. Al respecto, indicó que el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla las medidas de protección; el diverso numeral 155, las medidas cautelares; y, a partir del arábigo 227, las técnicas de investigación; y que la mayoría de estos actos se dan dentro del procedimiento.

En cuanto a la medida cautelar que implique privación de la libertad dictada por autoridad competente, indicó que deberá estarse a lo que prevé el artículo 166 de la Ley de Amparo, el cual contempla los términos y condiciones de procedencia de la suspensión, por lo que no opera, en automático, la prohibición del diverso artículo 128, párrafo tercero.

Abundó que, si bien el artículo 128, párrafo tercero, de la Ley de Amparo contiene una prohibición tajante, se trata sólo de una regla general, puesto que el diverso 129, fracción III, da la posibilidad de encontrar una excepción: “Se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [...] III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos”, lo cual resulta aplicable en un procedimiento de carácter penal, máxime que su último párrafo prevé que “El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensiva pueda causarse mayor afectación al interés social”.

Concluyó que el artículo no resulta inconstitucional si se lee en armonía con el capítulo de suspensión completo, en el sentido de que, si bien en principio aparenta ser una prohibición tajante, se deja la puerta abierta a las excepciones precisadas, siendo que el juez de amparo deberá determinar, en el caso concreto, si puede o no concederse dicha suspensión.

Estimó que, conforme al artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las providencias precautorias no están contempladas en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues se refieren a cuestiones patrimoniales, esto es, el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas, sobre las cuales eventualmente podría concederse la suspensión mediante alguna garantía, al no estar prohibida expresamente.



Sesión Pública Núm. 63

Martes 4 de julio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por tanto, se decantó por la constitucionalidad del artículo, mediante una interpretación sistemática, no conforme. Anunció que, en todo caso, formularía voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales prorrogó la discusión del asunto para una próxima sesión, por lo que deberá permanecer en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las catorce horas con dos minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el jueves seis de julio del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN